

EDITORIAL

La violencia y la inseguridad ciudadana frente al delito son una de las preocupaciones más apremiantes en Venezuela. Ello responde en buena medida al deterioro sostenido de los principales indicadores de ocurrencia delictiva desde la década de los años 80 hasta el presente, sin que gobierno o política pública alguna haya logrado revertir, o cuando menos contener, la ocurrencia de delitos, más aun de los delitos violentos que atentan contra la integridad personal y la construcción del tejido social.

De esta manera, como reflejo de la dimensión subjetiva de la seguridad ciudadana, se disponen de datos que señalan que, para el año 2009 el 94,25% de la población evaluaba la situación de inseguridad personal en Venezuela como muy grave o grave, cifra reflejada por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2009 (ENVPSC-2009) -instrumento que permite estimar los delitos no registrados en virtud de su no denuncia así como percepción de (in)seguridad- realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la Universidad Experimental de la Seguridad (UNES).

En relación a la dimensión objetiva, cifras de la policía de investigación (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas CICPC) apuntan que, para el año 2015, se registró a nivel nacional una tasa de robos de 272 por cien mil habitantes (un 25% más que el año inmediato anterior); la tasa de lesiones personales fue de 65 lpcmh; y como indicador revelador del mayor nivel de violencia por implicar la muerte de las persona encontramos que los homicidios llegan a una tasa de 48 por cien mil habitantes. De acuerdo a datos publicados por el Ministerio Público, la tasa de homicidios sería incluso mayor llegando a los 58 homicidios por cien mil habitantes.

Los datos disponibles demuestran que la población venezolana en general -con vulnerabilidades concentradas como víctimas y victimarios en diferentes actores- ha estado sometida por un largo periodo de 36 años aproximadamente a una situación de vulnerabilidad ante la delincuencia y particularmente ante sus manifestaciones violentas, que hace necesario el abordaje de esta situación que apremia y preocupa al país también desde la psicología.

Son diversos los actores vinculados en estas dinámicas, desde los victimarios y la víctimas de los delitos violentos, pero también la institucionalidad y actores comunitarios que tienen que hacer frente a esta situación, en contextos políticos de polarización que parecen alejados de estas dinámicas pero que en el fondo nos interpela sobre nuestra disposición al diálogo, al encuentro y al reconocimiento del otro.

Desde *Analogías del Comportamiento* sentimos que la psicología como ciencia y disciplina no puede

quedar al margen de este debate, de los estudios de la violencia, la delincuencia y sus implicaciones. Parte importante de estos han estado vinculados al abordaje de víctimas o victimarios desde la perspectiva clínica del trauma, cómo se comprenden y procesan las realidades en las que se viven y se construyen. En este sentido, es posible identificar investigaciones sobre grupos demográficos específicos, tal es el caso de niños, niñas y adolescentes, además de los estudios de la violencia de género.

Otras investigaciones se han dirigido a la caracterización del fenómeno delictivo desde la organización de los victimarios como particularidad de la situación actual; otros estudios se abocan a la consideración de una de las instituciones que más inmediatamente reconocemos como llamada a actuar: la policía, muchas veces invisibilizando el papel que deben jugar otras instituciones estatales y con ello desconociendo la complejidad y multidimensionalidad de la violencia y la delincuencia tantas veces mencionada. Más allá de ello, la policía ha jugado, juega (y parece que jugará) un papel fundamental en las dinámicas de violencia en el país. El abordaje de esta institución y sus funcionarios ha sido, igualmente, objeto de estudio de diferentes investigaciones.

Desde *Analogías del Comportamiento* esperamos colaborar con la apertura de espacios para la presentación y discusión de investigaciones tanto cuantitativas como cualitativas que se han desarrollado en el país. Para el presente número, tenemos la fortuna de contar con investigadores de amplia y reconocida trayectoria en el tema, incluyendo aportes desde la psicología social, la criminalística y la sociología en el marco de la necesaria interdisciplinariedad, cuya pertinencia se torna aun más patente en temas de notoria multidimensionalidad como la violencia y la inseguridad ciudadana. A estos expertos, se unen nuevas voces de investigadores que, en el ámbito de la psicología, comienzan a tomar éste como asunto de disertación. De esta manera, podemos señalar con orgullo para la Escuela de Psicología de la UCAB, que dos de los siete artículos que componen la publicación son el resultado de procesos de estudio más amplios adelantados como trabajos de grado por algunos de nuestros estudiantes.

Con una mirada amplia, el lector podrá encontrar en este número en principio un artículo sobre violencia política, despolarización y reconstrucción del tejido social, resultado de investigaciones de la profesora Mireya Lozada, que constituye un punto de partida contextual sobre la situación actual de la violencia –quizá más estructural y por ello menos advertida pero no influyente- en el país. A éste le sigue el valioso aporte del profesor Luis Gerardo Gabaldón quienes refieren dinámica de violencia para uno de los actores estatales llamado a hacer uso legítimo de la violencia: la policía, con una investigación que revisa actitudes y disposiciones de candidatos a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana sobre el entrenamiento y respuesta ante situaciones hipotéticas de enfrentamiento. Luego contamos con un artículo del Profesor Roberto Briceño León en el que se hace un análisis en la organización del delito en Venezuela, donde se refiere a crecientes niveles de estructuración que apuntan a cambios cualitativos en sus principales manifestaciones.

Reconociendo a los jóvenes como población particularmente vulnerable a situaciones de violencia, contamos con el aporte del Profesor Ramssés Guveia que aborda de percepciones globales e individuales de impunidad, ambiente escolar y comunitario, apoyo social y el estilo de afrontamiento en la búsqueda de

posibles factores que permitan esclarecer la aparición, aumento y permanencia de dichas conductas en la población adolescente; y finalmente tres artículos más que abordan la experiencia de diferentes actores ante manifestaciones también plurales de violencia: un estudio cualitativo el profesor Guillermo Sardi en el que sistematiza y muestra los desafíos de una experiencia de duelo para una madre de un joven que muere en el marco de la violencia; una investigación que concentra sus esfuerzos en explorar las construcciones sociales del amor, la familia y la violencia en mujeres agredidas por parte de su pareja y el proceso legal correspondiente adelantado por las psicólogas Sandra Pereira Álvarez Sucre y Andrea Guzmán Petrizo; y un artículo aportado por la psicóloga Alejandra Sapene de la organización Centro Comunitario de Aprendizaje (CECODAP) en el que a partir del estudio de un caso clínico se muestran los efectos que ejerce la violencia urbana sobre la salud mental de una niña de 8 años.

A todos los autores nuestro más sincero agradecimiento por apostar, junto a nosotros, en el necesario debate académico sobre un tema de tanta relevancia social, apuntando al apoyo de estudios que aborden y reflejen la realidad venezolana, a la construcción de categorías de análisis que ayuden en una mayor y mejor comprensión del fenómeno para su intervención.

Josbelk González Mejías
Coordinadora Editorial